

**República de Colombia**  
**Rama Judicial del Poder Público**



**Juzgado Diecinueve Civil Municipal**

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Proceso Nro. : 11001-40-03-019-2016-00449-00  
Clase de proceso : Ejecutivo  
Demandante : COOPERATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL  
DEMCOOP "DEMCOOP".  
Demandados : OMAR NADIN CHEMAS MURILLO y otros  
Asunto : Reposición y subsidio apelación.

**I. OBJETO A DECIDIR**

Se decide los recursos de reposición y en subsidio apelación, formulados por el apoderado de la demandante en contra del auto dictado el 22 de julio de 2021, por medio del cual se decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito.

**II. ARGUMENTOS DEL RECURSO**

**1.- Argumentos parte demandante:**

En síntesis, señaló el recurrente que, por auto del 28 de octubre de 2020, fue requerida la parte actora para que en el término de treinta (30) días *"se proceda a enviar emplazamiento, el cual fue enviado el 23 de septiembre, sin embargo este no se tuvo en cuenta por el despacho."*

Sostuvo que, en razón a que el Juzgado no tuvo en cuenta la publicación del 30 de octubre de 2020, elevó solicitud para que se diera cumplimiento a lo establecido en el art. 10 del Decreto 806 de 2020 -adjunta solicitud-, no obstante, el despacho no se pronunció, ordenando la terminación sin darle trámite.

Por lo anterior, solicita se revoque el auto atacado, y de acuerdo con lo establecido en el art. 10 del Decreto 806 de 2020, se ordene la inclusión en el Registro Nacional de Personas Emplazadas.

**III. CONSIDERACIONES**

1.- Ciertamente es que los medios de impugnación son instrumentos procesales puestos a disposición de las partes, orientados a corregir las posibles equivocaciones que el juez, en su labor de administrar justicia, defina en las decisiones que profiere. Uno de ellos es el recurso de reposición, cuya finalidad es conminar a la misma autoridad que profirió una decisión, para que la estudie nuevamente y determine si hay lugar a revocarla, modificarla, aclararla o adicionarla, teniendo en cuenta si incurrió en una omisión o aplicó indebidamente la ley.

2.- En primer lugar, cumple precisar que la notificación del mandamiento de pago o el auto admisorio de la demanda al extremo pasivo del litigio constituye un acto de suma importancia, por cuanto, de éste depende el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción, por ende, el debido proceso que garantiza una adecuada administración de justicia. Sobre el punto la Corte Constitucional en Sentencia T-225 de 2006 precisó:

*“Ha sido reiterada jurisprudencia de la Corte, que para garantizar la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y el derecho de defensa, es necesario que las personas que puedan resultar involucradas en procesos judiciales, cualquiera sea su naturaleza, deban ser enteradas acerca de la existencia del proceso mediante la notificación personal de la primera providencia que se profiere en el mismo, bien trátase de auto admisorio de la demanda o bien de mandamiento ejecutivo o de pago. Noticia de la existencia del proceso que debe hacerse en primer lugar, agotando todos los mecanismos dispuestos en la ley para hacerla de manera personal, y sólo en la medida en que no sea posible cumplir con ésta diligencia es pertinente, de manera subsidiaria, recurrir a otras formas dispuestas para el efecto por la ley”*

3.- Ahora, en cuanto a la terminación anormal del proceso consagrada el artículo 317 del Código General del Proceso la corporación en cita en ejercicio del control constitucional del literal g del numeral 2º precisó que: *“El desistimiento tácito, además de ser entendido como una sanción procesal que se configura ante el incumplimiento de las cargas procesales del demandante, opera como garante de: (i) el derecho de todas las personas a acceder a una administración de justicia diligente, celer, eficaz y eficiente; (ii) la posibilidad de obtener pronta y cumplida justicia y (iii) el acceso material a la justicia, en favor de quienes confían al Estado la solución de sus conflictos. Todo esto en el entendido de que la racionalización del trabajo judicial y la descongestión del aparato jurisdiccional, finalidades a las que aporta la decisión de terminar anticipadamente un trámite judicial, contribuyen significativamente a hacer más expedito el trámite de los litigios judiciales.”<sup>1</sup>*

De lo anterior, se desprende que, la figura en comento, puede ser entendida, de un lado, como una consecuencia procesal acaecida en razón a la negligencia, omisión, descuido o inactividad de la parte que ejerce el derecho de acción, en términos generales se sanciona la falta de interés para continuar con el proceso; y de otro lado, como un modo de garantizar la administración de justicia de forma celer y eficaz evitando la congestión judicial por actuaciones no atendidas en debida forma, operando en dos eventos en particular, el primero de ellos, que es el aplicado en el caso concreto, señala que hay lugar a la terminación del asunto:

*“1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requerirá el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, **el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.***

***Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.”*** (Énfasis fuera de texto).

A su vez el artículo 117 de la Ley 1564 del 2012, establece que los términos señalados para la realización de los actos procesales son perentorios e

---

<sup>1</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-173 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

improrrogables, salvo disposición en contrario, de manera que, deben ser acatados con estricta pues su inobservancia surtirá los efectos a que haya lugar.

4.- Descendiendo al caso puesto a consideración del Despacho, se advierte que, mediante auto de fecha 27 de octubre de 2020, se requirió a la parte actora para que dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de ese proveído, diera cumplimiento a lo ordenado en la parte final de auto de fecha 15 de mayo de 2019, so pena de dar aplicación a la sanción procesal de que trata el numeral 1° del artículo 317 del Código General del Proceso.

En razón a lo anterior, comoquiera que el aludido término transcurrió sin que la parte demandante hubiese dado cumplimiento a lo ahí dispuesto, el expediente ingresó al despacho para lo pertinente, motivo por el que, en providencia notificada por estado del 23 de julio del presente año, se dispuso la terminación del proceso por desistimiento tácito.

5.- Bajo esta perspectiva, revisadas las actuaciones surtidas se advierte la improsperidad del recurso formulado, por cuanto se observa que la providencia objeto de censura se encuentra ajustada a derecho.

En efecto, la decisión de terminar el proceso por desistimiento tácito es el resultado de la aplicación de la normatividad que regula la materia y es consecuente con los aspectos fácticos del caso, amén que se adoptó con observancia del debido proceso, pues previo a la terminación se ordenó el requerimiento a la parte, otorgando al extremo interesado la oportunidad de que efectuara la actuación correspondiente en un término de treinta (30) días y así cumpliera con su deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, sin que se hubiese acatado la carga procesal impuesta.

Y que pese a que, el censor manifestó que el 30 de octubre allegó la constancia del emplazamiento, y adjunto copia del correo remitido al Juzgado en esa data en el que se lee: *“En atención al asunto que antecede me permito remitir nuevamente soporte de emplazamiento del demandado OMAR CHEMAS publicado el 20 de septiembre de 2020, dando así cumplimiento al auto de fecha 10 de agosto de 2020 de su honorable despacho, lo anterior teniendo en cuenta que el auto de fecha 27/10/2020 no tiene en cuenta que el emplazamiento ya fue realizado según lo indicado en el auto de fecha de 10 de agosto de 2020, por otro lado en caso de que no se pueda tener en cuenta dicho emplazamiento solicito que este se realice por la secretaria de su despacho, pues a la luz del art 10 del decreto 806 de 2020 se debe realizar el emplazamiento únicamente en el registro de nacional de emplazados, sin la necesidad de publicación en un medio escrito.”*; asimismo allegó constancia del emplazamiento efectuado el 20 de septiembre de 2020.

No obstante, el recurrente no advirtió que, en proveído del 27 de octubre de 2020, en manera alguna se le requirió para que aportara constancia del emplazamiento, *contrario sensu*, en pro que acatara la directriz impartida en el inciso final del auto de 15 de mayo de 2019, mediante el cual se dispuso:

*“De otro lado, **previo a decretar el emplazamiento de OMAR NADIN CHEMAS MURILLO deberá corroborarse la información contenida en la certificación que obra a folio 62**, pues allí se lee “La correspondencia se pudo entregar: No, Motivo: [nq – No hay quien reciba]”; es decir, no cumple lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 291 del Código General del Proceso (...).”* (Énfasis añadido)

Bajo ese entendido, ciertamente le correspondía intentar nuevamente la notificación en la dirección informada, conforme había sido igualmente advertido en auto del 5 de diciembre de 2019 (fl.92), luego es responsabilidad de la parte actora, asumir las cargas y deberes que le impone el ordenamiento jurídico a fin de resolver los asuntos sometidos a la jurisdicción, aclarando que, cuando se ordena realizar una actuación la misma debe ser **efectiva**.

Con relación a este tópico la Sala de Casación Civil, de la Corte Suprema de Justicia en estudio de una acción constitucional mediante proveído STC1150-2021 de 10 de febrero de 2021 señaló:

*“Pese a que la quejosa realizó actuaciones que el a quo constitucional consideró que interrumpieron el término del artículo 317 del C.G.P., la Sala no comparte esta premisa, por cuanto el cumplimiento del requerimiento no puede darse a medidas o de manera inconclusa, de lo contrario entorpecería la finalidad que encierra la figura del desistimiento tácito.*

*Al respecto, esta Corte ha dicho:*

*«Pero también fue descartada la interrupción del término dispuesto para el cumplimiento de la carga procesal incumplida, que llevó al desistimiento tácito, porque si el requerimiento que hace el juez para que se ejecute la carga pendiente, según el numeral 1º del susodicho artículo 317 del CGP, pudiera interrumpirse con ‘cualquier actuación’, como se anotó, tal mecanismo de dirección y ordenación procesal carecería de sentido, pues con una actividad indeterminada o carente de idoneidad se burlaría fácilmente el propósito legislativo de lograr la marcha organizada del trámite judicial. De ahí que la actuación de la parte requerida en esa particular hipótesis normativa, tiene que ser idónea para el impulso del asunto» (CSJ. AC8174-2017, reiterado en STC4021-2020).»*

De manera que, habiendo dejado vencer el término otorgado, y como de manera reiterada lo ha sostenido la jurisprudencia, no resultan suficientes los actos de simple trámite que no materializan la carga requerida dentro del término señalado, toda vez que los términos son perentorios y de obligatorio cumplimiento (Art. 117 del C. G. del P.), le compelia acatar la orden de notificar en debida forma al extremo ejecutado.

Lo anterior, conllevó igualmente al incumplimiento de uno de los deberes de las partes y sus apoderados –núm. 6º, art. 78 ejusdem-, esto es, **“Realizar las gestiones y diligencias necesarias para lograr oportunamente la integración del contrario.”**, siendo una carga exclusivamente de su competencia.

Motivos suficientes, para mantener el proveído recurrido por ser resultado de la estricta aplicación de la normatividad establecida para el presente asunto.

6. De otra parte, no es posible conceder el recurso subsidiario de apelación como quiera que el presente asunto es de mínima cuantía y por ende, de única instancia, por lo que no es procedente el mencionado mecanismo de impugnación (art. 17, num. 1º), por lo que se denegará.

#### IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley;

**RESUELVE:**

**PRIMERO.- MANTENER INCÓLUME** el auto recurrido de fecha 22 de julio de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.-

**SEGUNDO: DENEGAR** la concesión del recurso subsidiario de apelación, por improcedente por ser el proceso de única instancia.

**Notifíquese y Cúmplase,**<sup>2</sup>

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ  
JUEZ**

A.M.C.B.

Firmado Por:

Iris Mildred Gutierrez  
Juez Municipal  
Civil 019  
Juzgado Municipal  
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **adb2d7686d57d490b25d84880ad81ed81fd3a49492f68b90d287c7419b9726e1**

Documento generado en 24/08/2021 03:03:24 p. m.

---

<sup>2</sup> Esta providencia se notificó por estado No. 094 de 25 de agosto de 2021.